



Luis de Guindos, ministro de Economía que ha liderado el rescate a las entidades financieras desde 2012.

EUROPA PRESS

El rescate al sector financiero que comenzó en 2009 amenaza ser interminable y provocar más agujeros en las arcas públicas. El Tribunal de Cuentas da por hecho que 26.300 millones que puso el Estado se han perdido para siempre, pese a la promesa del Gobierno de que los ciudadanos no pagarían la crisis financiera. El problema es que pueden llegar nuevas derramas que podrían

suponer otros 20.000 millones al contribuyente, principalmente por Bankia, BMN y la Sareb, pero también por las garantías frente a pérdidas ocultas que en su día ofreció el FROB para asegurarse la venta de cajas con problemas. A ello habría que sumar los costes judiciales que se avecinan para el Estado si las cláusulas suelo terminan de forma masiva en los tribunales.

Futuras derramas supondrían más dinero al contribuyente, principalmente por Bankia, BMN y la Sareb

La cuenta pendiente del rescate: otros 20.000 millones

■ **Esmeralda Gayán**

El agujero público del rescate bancario amenaza con aumentar cada vez más. El **Tribunal de Cuentas** cifraba recientemente las ayudas al sector financiero en 41.786 millones de euros, de los que 26.300 millones se han perdido para siempre.

Además, y aquí viene la clave, el organismo que preside **Ramón Álvarez de Miranda** deja abierta la factura a posibles nuevos gastos. "Como es obvio, la estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva en tanto no estén finalizadas todas las consecuencias de los procesos de reestructuración", apunta en su "Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2008 a 2015".

Y es que los recursos públicos comprometidos en ayudar a entidades con

problemas superan los 120.000 millones de euros. En concreto, el órgano fiscalizador lo cifra en 122.122 millones de euros. Es decir, más del doble de los 60.700 millones que ha costado, por el momento, rescatar al sector financiero.

Es difícil saber cuál será la factura final para el ciudadano hasta que las entidades en manos públicas, **Bankia y BMN**, no se privaticen y se liquide la **Sareb**, a la que le queda un plazo de 12 años. Hasta entonces, no se podrá conocer con exactitud la pérdida del Estado, aunque Cuentas reconoce un deterioro de 11.187 millones en el caso de las participaciones en Bankia y BMN.

Lo que sí puede hacerse es una estimación sobre cuánto perdería el contribuyente si la venta de Bankia y BMN se produjese hoy, o si no se recuperasen otras partidas, como los 1.652 millones de deuda subor-

dinada de Sareb suscrita por el FROB y de difícil recuperación, las inyecciones en forma de los llamados CoCos o las pérdidas por los llamados Esquemas de Protección de Activos, unos contratos que implican que el Estado tiene que poner dinero en las subastas de algunas entidades si no se venden los activos a un precio estipulado en esos mismos contratos, es decir, una garantía pública frente a posibles pérdidas privadas.

En total, la factura para el erario público subiría al menos otros 20.000 millones más, de los cuales, la mayor parte procederían de las minusvalías de la venta de Bankia, ya que fue la entidad en la que más dinero se invirtió. Los públicos comprometidos en la entidad que preside **José Ignacio Goirigolzarri** ascendieron en su día a 22.426 millones de euros. En 2010, y toda-

vía con **Rodrigo Rato** a los mandos, Bankia recibió una primera ayuda de 4.465 millones de euros. Y dos años después, el grupo recibió otros 17.959 millones, si bien sólo 10.700 millones se convirtieron en acciones de la entidad.

Por ahora, el ciudadano sólo ha recuperado unos 1.627 millones, que son los que ha logrado o devolver Bankia tras vender un 7,5% de sus acciones en febrero de 2014, lo que le permitió ingresar 1.304 millones y por otro, gracias a los dividendos pagados por Bankia hasta ahora, que han sumado otros 323 millones para el FROB.

Sin embargo, la entidad nacionalizada vale en Bolsa unos 11.000 millones, de los que aproximadamente 7.000 son públicos. Por tanto, la participación que tienen los contribuyentes en Bankia está muy lejos del dinero desembolsado en

su rescate, con lo que, si su venta se produjese ahora, habría que apuntarse un importante quebranto en las arcas públicas.

De ahí que **Luis De Guindos**, en uno de los últimos consejos de ministros del pasado año, aprobase un decreto que daba tres años más al Estado para vender el 65% del capital que tiene en la matriz, BFA. El ministro de Economía modificaba así la hoja de ruta en la que estaba estipulado que la venta de Bankia y BMN debía realizarse antes de que finalizase 2017.

No obstante, y a la espera de que Bankia se privatice, la reestructuración más onerosa por el momento

Los 1.652 millones de públicos comprometidos en la Sareb o banco malo, al ser capital, absorbería pérdidas en el caso de problemas del ente semipúblico que preside Jaime Echegoyen

ha sido la de **Catalunya Banc**, que ha costado 12.676 millones a las arcas públicas.

En el caso de BMN, es difícil conocer su valor porque la entidad que preside **Carlos Egea** no cotiza. Según las fuentes financieras sondeadas por este periódico, ningún banquero va a ofrecer una oferta razonable para adquirir la entidad surgida de la fusión de **Caja Murcia** y otras entidades más pequeñas. Ello hace pensar en que su absorción por parte de Bankia será una realidad. Por ahora, la consultora **AFI** asesora al FROB y analiza las ventajas de la unión de las dos entidades, junto a otras alternativas, para ayudar a decidir la mejor opción para recuperar las ayudas públicas concedidas, pero en ningún caso se prevé recuperar ni siquiera más de la mitad de lo inyectado.

La Sareb, foco de pérdidas

El banco malo puede ser otra fuente de pérdidas para el Estado. Así lo reconoce el propio Tribunal de Cuentas, cuando entre los posibles futuros quebrantos cita la evolución posterior a 31 de diciembre de 2015 de la deuda subordinada de Sareb suscrita por el FROB, por importe de 1.652 millones de euros, convertida parcialmente en capital en 2016.

El organismo alerta en este caso de que la cantidad comprometida en la Sareb, al ser capital, absorbería pérdidas en el caso de problemas del ente semipúblico que preside **Jaime Echegoyen**.

Además, está por ver si los contratos que incluyeron las subastas de las cajas obligan al FROB a realizar las devoluciones de las cláusulas suelo, una vez que el **Tribunal Superior de la Unión Europea (TSJUE)** ha considerado que las citadas cláusulas son nulas sin límite plazo, obligando a abonar a los afectados la totalidad del dinero cobrado de más desde la firma de su hipoteca.

Por ahora, es complicado saberlo, ya que en el **Banco de España** explican que en los cuadernos de venta de las cajas rescatadas existen unas cláusulas de confidencialidad que impiden desvelar qué asuntos exactamente estaban recogidos en los términos del traspaso.

No obstante, **Abanca**, heredera de Novagalicia y fruto de la fusión de las antiguas cajas gallegas, ya ha anunciado que todos los casos de cláusulas suelo que le surjan lo pagarán los contribuyentes de su bolsillo tal y como recogen las condiciones otorgadas por el Banco de España en su adjudicación, que cubren el 85% de la factura que de estas cuestiones se derive.

La banca también se enfrenta a nuevos quebrantos por las cajas

■ No sólo el Estado seguirá perdiendo dinero por el rescate financiero. También la banca tendrá que pagar todavía derramas por la venta de las antiguas cajas. por los denominados esquemas de protección de activos (EPA) firmados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) financiado por la banca, después de que el Gobierno de **José Luis Rodríguez Zapatero**, en uno de sus últimos consejos

de ministros, aprobase que las entidades financieras también tendrían que costear una parte del rescate.

En total, el sector financiero ha aportado hasta la fecha 18.932 millones para rescatar a las antiguas cajas quebradas, un dinero que, no obstante, ha ido a parar a los bancos que compraron esas entidades. Es el caso de la subasta de la **CAM**, que compró el **Banco Sabadell**, y que le ha costado al sector unos 9.400 millones de

euros, según los últimos informes anuales publicados por el banco que preside **Josep Olliu**. Sólo en 2015, el Sabadell pasó una factura de 825 millones al Fondo de Garantía de Depósitos, financiado por la banca, para hacer frente al 80% de la morosidad aflorada en la CAM tras acabar con las provisiones. Según cálculos conservadores, este año la factura subirá a más de 1.000 millones, por lo que el agujero de la CAM superará los

1.800 millones en solo dos ejercicios.

Por su parte, el **Banco de Valencia**, adquirido por **CaixaBank**, hasta 2015 ha generado 2.392 millones de morosidad que está cubierta por las provisiones, por lo que el Estado aun no ha pagado nada. Otras entidades en las que el Estado y la banca pueden sufrir nuevos agujeros procederían de las subastas de **Banco Ceiss**, **Banco Gallego**, **Catalunya Caixa** y **NovaCaixaGalicia**.